



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante: MEDARDO ESTRADA CASTILLO
Demandados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES-
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS -
PORVENIR S.A.-
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS -
COLFONDOS S.A.-
Radicado: 05001 31 05 015 2019 00405 01
Sentencia: S-147

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite al recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de Colpensiones en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín el día 23 de septiembre de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

MEDARDO ESTRADA CASTILLO demandó a COLFONDOS S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la nulidad del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar los aportes recibidos, con los rendimientos financieros y sin descuento alguno por cuotas de administración. Pretende además se condene en costas y agencias en derecho como lo decrete el juez.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 17 de agosto de 1962, inició sus cotizaciones en el ISS en el RPMPD en el mes de septiembre de 1996; en el mes de noviembre de 2000 se afilió al Fondo de Pensiones y Cesantías COLFONDOS S.A.; que, en ese momento, dicha administradora, no fue clara, ni precisa, frente a la información del estado final de su pensión, por lo que se le violentó su deber de información, además de los principios de la buena fe y transparencia al no realizarse una asesoría que le permitiera tener un contexto claro acerca de las condiciones de su pensión. Indica que el 09 de septiembre de 2018 COLFONDOS S.A. le manifestó que no contaba con soporte que respalde la asesoría que supuestamente le fue brindada por esa administradora. Que en octubre de 2018 presentó reclamación ante Colpensiones de traslado de régimen, sin recibir respuesta alguna.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES dice que es cierta la fecha de nacimiento del demandante, así como la de afiliación a esa entidad, pues así se demuestra con la prueba documental allegada al proceso. Frente a los

demás hechos, manifiesta que no le constan, por cuanto se derivan de una relación contractual de COLFONDOS S.A. y el demandante. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones por carecer las mismas de fundamento fáctico y legal. Como excepciones propuso inexistencia de declarar ineficaz o nulo la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, prevalencia de la autonomía de la voluntad privada, devolución de cuotas de administración, intereses moratorios o indexación de las condenas a cargo de la AFP codemandada, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

COLFONDOS S.A. por su parte, acepta únicamente la fecha de nacimiento del demandante, la de suscripción del formulario de afiliación el 25 de septiembre de 2000 y su efectividad a partir del 01 de noviembre de ese mismo año. Frente a los demás hechos dice que no son ciertos, por cuanto la afiliación la hizo el actor de una manera libre y voluntaria, suscribió el formulario imponiendo su firma en señal de aceptación. Sobre la afiliación al ISS, indica que no le consta ya que es un hecho ajeno a dicha administradora. Como excepciones propuso falta de legitimación en la causa por pasiva, no existe prueba de causal de nulidad alguna, prescripción de la acción para solicitar la nulidad de traslado, buena fe, compensación y pago, saneamiento de cualquier presunta nulidad de la afiliación, innominada o genérica, ausencia de vicios del consentimiento, nadie puede ir en contra de sus propios actos, obligación a cargo exclusivamente de un tercero.

Con base en la información suministrada por COLFONDOS S.A. al contestar la demanda, la Jueza de Primera instancia, mediante auto del 05 de noviembre de 2019, dispuso vincular al proceso en calidad de litisconsorte necesario por pasiva a la AFP PORVENIR S.A., la que contestó la demanda diciendo que no le constan los hechos del primero al quinto, del noveno al catorce de la demanda, pues se tratan de circunstancias que competen a otra administradora diferente a PORVENIR S.A.; respecto a los hechos sexto al octavo, manifiesta que son apreciaciones subjetivas de la parte demandante, puesto que

esa administradora para el momento del traslado del demandante, realizó una campaña publicitaria en la que se explicó a todos los afiliados las características del RAIS.

Se opuso a las pretensiones dado que nos encontramos frente a un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento y como excepciones propuso prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 23 de septiembre de 2020, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín i) DECLARÓ la ineficacia de la afiliación efectuada por el demandante al Régimen de Ahorro Individual administrado por las AFP PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A.; ii) ORDENÓ a COLFONDOS S.A. trasladar a COLPENSIONES el valor de la cuenta de ahorro individual del demandante, sin incluir otros conceptos, ni cuota de administración; iii) ORDENÓ a COLPENSIONES recibir las anteriores sumas de dinero y reactivar la afiliación del señor MEDARDO al RPMPD; iv) ABSOLVIÓ a PORVENIR S.A. de trasladar a COLPENSIONES las cuotas de administración; CONDENÓ en costas a todas las entidades demandadas, disponiendo a título de agencias en derecho el valor de \$877.803 a cargo de cada una de ellas.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con lo decidido, COLPENSIONES interpuso recurso de apelación solicitando se revoque la sentencia por cuanto, en primer lugar, Colpensiones es un tercero ajeno a ese negocio jurídico del cual no puede verse perjudicado por el error en el cual incurrieron las AFP demandadas. Frente a la ineficacia, el demandante realizó su afiliación a los fondos privados a través de un acto libre y voluntario, y por ende sus manifestaciones son infundadas, ya que no existió vicio en el

consentimiento, tales como dolo, culpa, y tampoco se ejerció algún tipo de fuerza al firmar el formulario de afiliación.

Respecto a las cuotas de administración, dice la recurrente que si el Tribunal Superior de Medellín ratifica que la ineficacia fue causada por la conducta indebida de las AFP, estas deben asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el RAIS o por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales deben ser asumidos por las administradoras a cargo de su propio patrimonio siguiendo para el efectos las reglas establecidas en el artículo 963 del Código Civil; lo anterior lo sustento en la sentencia CSJ 31989 del 09 de septiembre de 2008 *"la administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiera recibido con afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora con todos sus frutos, e intereses como lo dispone el artículo 1746 del código civil, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado"*.

Sobre la condena en costas procesales, no tiene soporte una condena por este concepto por decretarse la ineficacia de traslado, por cuanto la entidad que represento ha obrado de buena fe y actúa según lo ordena las características filosóficas de sus funciones, sin que pueda ejecutar hechos prohibidos por las leyes y muchos menos violar su propio reglamento como en el caso concreto, en este sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado exp. 10918 de 1999 *"es claro que el legislador no ha podido en este caso aplicar un criterio para determinar a cargo de quien están las costas del proceso y por lo tanto, no es la ausencia de razón en la pretensión u oposición lo que hace sujeto de sanción a la parte sino su conducta abusiva que implique un desgaste innecesario para la administración"* en el proceso se puede evidenciar que el actuar de Colpensiones siempre fue de buena fe y no tuvo injerencia alguna de las pretensiones del demandante."

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, COLPENSIONES presentó sus alegatos en los mismos términos del recurso de apelación, sobre la ineficacia de traslado insiste en que el demandante realizó su afiliación al fondo privado, a través de un acto libre y voluntario, no existieron vicios en el consentimiento tales como dolo, culpa y tampoco se ejerció algún tipo de fuerza o constreñimiento al firmar el formulario de afiliación a PORVENIR y COLFONDOS S.A.

Sobre las cuotas de administración y lo demás rubros de la cuenta de ahorro individual dijo igualmente que, al declararse la ineficacia, se debe ordenar a las AFP PORVENIR y COLFONDOS, que la devolución de los aportes comprenda la totalidad del aporte realizado en favor de la parte demandante, incluidos los destinados al pago administración de la cuenta, al pago de primas de seguros previsionales para invalidez, muerte y a financiar el fondo de solidaridad pensional, puesto que, deben asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, es decir, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya sea por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, o por los gastos de administración en que hubieren incurrido, los cuales deben ser asumidos por las administradoras a cargo de su propio patrimonio.

Agrega que, frente a una posible condena en costas procesales, se debe resaltar que la misma no tiene soporte, pues Colpensiones ha obrado de buena fe, y actúa según lo ordena la característica filosófica de sus funciones, sin que pueda ejecutar hechos prohibidos por las leyes y menos violar sus propios reglamentos, como en el caso concreto.

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por la apoderada de COLPENSIONES a través del recurso de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA a su favor -en los temas restantes- con el objeto de salvaguardar los intereses de la entidad, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia, mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación del señor MEDARDO ESTRADA CASTILLO realizada al RAIS, así como las órdenes consecuenciales respecto a los dineros que PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A., quedan en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** MEDARDO ESTRADA CASTILLO nació 17 de agosto de 1962; **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el ISS y comenzó a realizar cotizaciones el 01 de septiembre de 1996, acumulando en esa entidad un total de 213.43 semanas; **iii)** el 01 de noviembre de 2000 suscribió el formulario de afiliación a la AFP COLFONDOS S.A.; **iv)** Posteriormente se trasladó a la entonces AFP HORIZONTE hoy PORVENIR S.A., según formulario de vinculación del 16 de abril de 2013, y **v)** después se trasladó nuevamente a la AFP COLFONDOS S.A. según formulario del 25 de septiembre de 2014, efectivo a partir del 20 de octubre de ese mismo año, entidad en la que se encuentra afiliado actualmente.

Ahora, según viene de verse, lo que pretende el demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS administrado en este caso por las AFP PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A., para que, consecuentemente, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES, con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente e inadecuado por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el

traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto, importa reiterar, tal y como ha sido dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada, como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar,

como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar a portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para el afiliado de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993 o Decreto Orgánico del Sistema Financiero dentro del cual se hallan inmersos los fondos de pensiones, momento para el cual, el alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *“las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales”*

2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y
3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas del afiliado, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, incumplió el Fondo privado su deber de información a la afiliada, al no suministrarle, *"en forma clara y precisa, las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen"* (SL 1689-2019)

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*“Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...].***

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

De otro lado, en cuanto a la decisión de la *a quo* de exceptuar otros conceptos de la devolución de los valores recibidos por la administradora con motivo de la afiliación del demandante como las cuotas de administración, sumas adicionales de la aseguradora y los descuentos de garantía de pensión mínima, tema cuestionado en el recurso de apelación por COLPENSIONES, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con el traslado a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el

estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018, SL 1421 de 2019, SL 1688 de 2019, rad. 68838 de mayo 8 de 2019, o más recientemente la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667. En esta última dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

(...)

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de

administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima" (Resaltado por la Sala).

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado "... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...".

Dijo además en esa providencia, que:

"Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.

(...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se

consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.”

En consecuencia, la decisión deberá ser MODIFICADA en el sentido de ordenarle a la AFP COLFONDOS S.A. que proceda igualmente a la devolución de los porcentajes descontados por concepto de cuotas de administración, incluyendo las primas de seguros y reaseguros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que el señor MEDARDO ESTRADA CASTILLO estuvo vinculado a esa entidad.

Además, la decisión deberá ser ADICIONADA en el sentido de ordenarle también a la AFP PORVENIR S.A., que proceda a trasladar a COLPENSIONES las cuotas de administración, sumas adicionales de las aseguradoras y porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, recibidos durante el tiempo de vinculación del demandante en esa entidad.

Se advierte igualmente que la orden a cada AFP debe proceder con el traslado de los conceptos mencionados incluyendo la respectiva indexación, según la ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y según se solicita por COLPENSIONES en la contestación a la demanda.

Condena en costas

Ahora en lo que tiene que ver con la condena en costas impuesta a cargo de COLPENSIONES, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de

apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Pero, en estos casos, la condena a COLPENSIONES a recibir el valor de los aportes realizados a la AFP del RAIS y a reactivar la afiliación del demandante, es solo la consecuencia lógica de la orden previamente impartida en este proceso, en el sentido de declarar la ineficacia de esa afiliación al RAIS, de manera que bien puede decirse que, sin esta orden, aquellas condenas no se hubieran producido. Dicho de otro modo, era inexigible otra conducta para COLPENSIONES antes de que la presente declaratoria de ineficacia del traslado se hubiere proferido, pues esta entidad no es autoridad judicial como para resolver, antes del proceso, la reclamación del demandante.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, el día 23 de septiembre de 2020, pero con las siguientes novedades según se dijo en la parte motiva: **1.** La **MODIFICA** en el sentido de ordenar a la AFP COLFONDOS S.A., que proceda igualmente a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, con la respectiva indexación, el valor recibido por concepto de cuotas de administración, incluyendo porcentajes de seguros y reaseguros, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, durante el tiempo que el demandante estuvo afiliado a esa entidad; **2.** La **ADICIONA** en el sentido de ordenar también a PORVENIR S.A., que proceda a trasladar a COLPENSIONES, con la debida indexación, el valor recibido por concepto de cuotas de administración, incluyendo porcentajes de

seguros y reaseguros, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, durante el tiempo que el demandante estuvo afiliado a esa entidad; y **3. La REVOCA** en cuanto condenó en costas a la ACP COLPENSIONES-, para en su lugar absolverla por este concepto.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso. En constancia firman.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N°113
del 30 de junio de 2021

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Código de verificación: **25616d15fc46a86f11b8adad1bf85e04b1351d797863759f18a9f3646c4c6fd8**

Documento generado en 29/06/2021 11:32:54 AM